

## **Cesión por operador a ISP del número de teléfono del abonado para evitar el abuso en Internet. Informe 223/2004**

La consulta plantea si resulta conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación “a los prestadores de servicios de Internet del dato del número de teléfono con objeto de que puedan gestionar los abusos de Internet, en los supuestos en que la dirección IP del usuario (estática o dinámica) se asigna en el radius de la red xxx de xxx, todo ello con el fin de cumplir la obligación impuesta a los operadores de red y prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas por la Ley General de Telecomunicaciones de informar a sus abonados de los riesgos de violación de la seguridad de la red pública de comunicaciones electrónicas y de las medidas a adoptar”.

Según indica la consulta, ante un supuesto de abuso o práctica ilícita por un usuario de comunicaciones electrónicas, que resulte contrario a lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones o en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y planteada una reclamación por parte de cualquier usuario de Internet en las direcciones habilitadas al efecto, será necesario que el proveedor de servicios de Internet que haya contratado el usuario incumplidor pueda adoptar determinadas medidas que impidan la persistencia en el abuso.

Para la adopción de dichas medidas será preciso, según se señala, que por el proveedor de servicios de Internet pueda tenerse conocimiento de determinados datos que permitan identificar al usuario, tales como su número de teléfono, que, en principio no se encuentran en sus ficheros, habida cuenta que la prestación del servicio se realiza mediante la utilización de la red de la propia consultante.

Por otra parte, se indica que “en los contratos que xxx suscribe con los ISP se contempla la necesidad de que el ISP se obligue a recabar el consentimiento del cliente para la comunicación de dicho dato”, si bien el problema puede plantearse “cuando el número de implicados en cadena es muy numeroso”.

Dicho lo anterior, el suministro de la información a la que se refiere la consulta constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto de las cesiones de datos, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, el artículo 11.2 c) prevé que la cesión no precisará del consentimiento del interesado “cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros”.

A su vez, como indica la propia consulta, el artículo 34 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, establece que:

“Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6 del artículo 4 y en el segundo párrafo del artículo anterior, así como en la restante normativa específica aplicable, los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar, en el ejercicio de su actividad, la protección de los datos de carácter personal conforme a la legislación vigente.

Los operadores a los que se refiere el párrafo anterior deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas para preservar la seguridad en la explotación de su red o en la prestación de sus servicios, con el fin de garantizar los niveles de protección de los datos de carácter personal que sean exigidos por la normativa de desarrollo de esta Ley en esta materia. En caso de que exista un riesgo particular de violación de la seguridad de la red pública de comunicaciones electrónicas, el operador que explote dicha red o preste el servicio de comunicaciones”.

Por otra parte, la contratación del usuario con el proveedor de servicios de Internet de la prestación del servicio de acceso a Internet implica la obligación de aquél de respetar las condiciones para la utilización del servicio que prevea el propio contrato, así como las que se desprende de lo establecido en la Ley 32/2003, la Ley 34/2002 y el resto de normas aplicables a la utilización de dicho servicio.

Entre dichas condiciones y obligaciones legales se encontraría, lógicamente, la prohibición de interceptación de comunicaciones electrónicas, del envío de comunicaciones comerciales no solicitadas a quien no hubiera prestado su

consentimiento, en los términos previstos en la Ley 34/2002, de la introducción de dialers o dispositivos invisibles o de utilización de la red para el envío de contenidos prohibidos por la Ley, como los descritos en la consulta.

Pues bien, de lo indicado hasta este momento se desprende que el proveedor de servicios de Internet deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar un adecuado control de la actividad desplegada por parte del usuario con el que hubiera contratado la prestación del servicio, a fin de garantizar, por una parte, que el servicio es utilizado en los términos previstos en el contrato y, por otra, la seguridad de los usuarios de la Red.

Por este motivo, en caso de que el proveedor de servicios precisase conocer algún dato adicional que pudiera permitir localizar al usuario que se extralimita en la utilización del servicio contratado, deberá poder obtener dicha información de quien, como sucede en el supuesto descrito en la consulta, ha contratado con el proveedor de los servicios, la utilización del servicio de red necesario para el adecuado acceso.

Por este motivo, dado que el dato se facilitaría para el control de la relación contractual mantenida entre el proveedor de servicios de Internet y el afectado al que los datos se refieren, la cesión se encontraría amparada en lo dispuesto en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

En todo caso, es preciso tener en cuenta que dicha cesión debería producirse únicamente en el supuesto en que el proveedor de servicios de Internet careciese de datos que permitiesen identificar al usuario y que los datos únicamente deberán ser empleados para la finalidad de control descrita, tal y como se desprende de lo dispuesto en el propio artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.